



RESULT AND O:

1.- En la fecha arriba señalada y dentro del procedimiento de referencia, la Juez pronunció la sentencia interlocutoria recurrida, cuyos puntos resolutivos a continuación se transcriben:- - - - -

“PRIMERO.- Se ha tramitado en la vía incidental, el presente INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE EJECUCION DE SENTENCIA, intentada por ***** ***** ***** *****, en contra de **** ***** **** *****; en donde la actora incidentista no acreditó su incidencia y el demandado incidentista se opuso a la demanda

incidental; en consecuencia.- - - - - SEGUNDO.- Se declara improcedente el Incidente de Prescripción la Ejecución de la Sentencia, planteado por el actor incidentista *****
****, por los razonamientos expuestos en el Considerando VI Sexto del presente fallo.- - - - -
- - - - - TERCERO.- Se absuelve a la parte demandada incidentista, ****, de todas y cada una de las prestaciones solicitadas por la parte actora incidentista, en términos del Considerando VI Sexto del presente fallo.- - - - -
- - - CUARTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y CÍMPLASE.”- - - - -

2.- Inconforme con la resolución de referencia, *****
****, interpuso recurso de apelación, mismo que le fue admitido por la Juez en **efecto devolutivo**.- - -

3.- Por auto de 5 cinco de Abril de 2024 dos mil veinticuatro, ésta Sala formó el toca número **137-B-1C01/2010 Segundo Subsecuente**, revocó la calificación del grado hecha por la Juez natural, y tuvo por legalmente admitido el recurso en **efecto devolutivo**.- - - - -

4.- Los agravios expuestos por *****
son del tenor siguiente:- - - - -

“AGRAVIOS: -- PRIMERO.- Con la redacción del considerando V de la sentencia impugnada, se surte una violación insalvable, porque la Juez establece equivocadamente de manera restrictiva o limitante, la acción planteada, al decir que demandé la prescripción del plazo para ejecutar la sentencia definitiva y el obstáculo legal insuperable, sin embargo al redactar el considerando VI indica que es improcedente la prescripción en términos del artículo 400 del Código Procesal, al analizar las constancias; pero me agravia el hecho de que la juzgadora decide



no aplicar las disposiciones de fondo establecidas para la acción que contempla el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles y plantea oscuramente como si la ejecución aún no se hubiera pedido por el actor, lo cual es una falsedad, la ejecución inicia desde el momento en que se decreta la rebeldía, sin embargo admite la juez en mi favor que el actor abandona el procedimiento durante más de diez años, aunque no explica la A quo qué quiere decir en su sentencia (esa parte que en extracto cito y es parte medular) (transcribe texto). Eso, además de no ser perfectamente entendible ni aplicable, necesariamente afectaría el principio de congruencia y exhaustividad que deben contener las sentencias pues estas deben atender las acciones deducidas y las excepciones opuestas, conforme a la ley establecida para el juicio con anterioridad, sin poder aplicar disposiciones que según la juez no existen para resolver o que existiendo no las quiere aplicar. Porque dice la juez “que la sentencia impone una obligación y aptitud para constituir el procedimiento instaurado para obtener su efectividad, elementos que permiten estar en condiciones de apreciar, si se ha producido la contumacia del beneficiado”. “que no me asiste derecho de pedir la prescripción de la ejecución de sentencia porque analiza la sentencia de 20 de mayo de dos mil diez”. Eso es un agravio evidente porque la materia del incidente no es para modo alguno dejar sin efecto la sentencia, o analizarla o concluir que nuevamente se sometió a su consideración cuestiones inherentes al derecho de propiedad. (derecho que no lo da la sentencia como equivocadamente lo sugiere) sino que la demanda incidental es para sancionar la contumacia o inactividad o por la no asertividad o por la inexistencia de actos que ya no podrán realizarse porque el acto no los satisfizo durante más de diez años, o haber abandonado esa obligación procesal impuesta en la ley en el citado artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles, no en la sentencia. La sentencia definitiva no constituye derechos sustantivos de propiedad sino declara obligaciones procesales que ameritan

también excepciones fundadas en la ley. Y ante esa obligación procesal actor de ejecutar la sentencia yo tengo como demandado el derecho de oponerme excepcionándome y de eso se trata la demanda incidental que no fue atendida en su integridad, no solo de la prescripción trata la demanda incidental, también del obstáculo legal insuperable contenido en la sentencia de primera instancia porque así fue observado en ejecución y materializado durante esa etapa por actos efectuados por el actor principal para variar la sentencia que constan en el proceso, lo cual constituye un todo en mi derecho a oponerme dadas las circunstancias acaecidas durante la ejecución que inicia propiamente con la declaración de rebeldía. Es, por tanto, improcedente la aplicación del artículo 1147 del Código Civil por parte de la Juez en la sentencia incidental impugnada, por cuanto a que esa disposición es parte medular aplicada en la sentencia pero esa hipótesis no contempla que los casos de excepción sean facultad del juzgador crearlos, sino al legislador, y el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles, que la Juez soslaya observar para resolver, es claro y aplicable a la demanda planteada; pero decide equivocadamente no observarlo para beneficiar a la contraria. Provocando la inequidad procesal. De ahí que se constituye el agravio por omisión de observar la ley exactamente aplicable al caso sometido a su facultad jurisdiccional; pues es falso que no exista disposición para que resuelva, siendo precisamente esa que soslaya. Y el obstáculo legal insuperable expuesto en la demanda incidental también probado en autos igualmente se evade respecto a la demanda incidental por la juzgadora, aunque ese acto devino de circunstancias procesales que harían procedente la excepción a la ejecución, porque la provoca el actor y la confirma el Juzgadora al consentir la ratificación o rectificación de la superficie a escriturar: lo que quiere decir que la sentencia no fue clara y fue necesario aclarar fuera del plazo de los diez años. Por lo que resulta claro que se ha violado, en mi agravio al sentenciar, por no atender la segunda prestación de la demanda, lo dispuesto en el artículo 81 del Código de



Procedimientos Civiles que manda (transcribe artículo), violándose también las reglas del procedimiento establecidas por el artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el estado, el cual estatuye grosso modo: “que para la sustanciación de los asuntos ante los tribunales ordinarios se estará a lo dispuesto por el citado Código, sin que se pueden alterar ni modificarse esas” es decir, no cabe el actuar arbitrario o modo de pensar personalísimo como la juzgadora lo decidió, al dictar la resolución incidental sin, por una parte, atender efectivamente la acción propuesta, que solo la redacta en la sentencia pero no la atiende al juzgar y la supuesta excepción del demandado incidental que no se produjo formalmente y por otra aplicar al fondo de la cuestión planteada un criterio de una tesis aislada no vinculante u obligatoria por un error de juicio al decidir soslayar la disposición efectivamente aplicable a la cuestión planteada; es decir la juez decide que la hipótesis de la ley establecida en el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles para el caso de la prescripción de los actor idóneos de ejecución, aún no solicitados por el ejecutante, en el plazo de los diez años, no debe aplicarse y que el caso de excepción a esa regla para la Juez se encuentra en su entendimiento y coincide con lo que le sugiere la tesis aislada para aplicarlo a la redacción de la primera parte del texto del artículo 1147 del Código Civil, “fuera de los casos de excepción” sin indicar cuál es aquella disposición que establece que la acción incidental, estudiada por la juez con violación a las normas, es efectivamente un caso de excepción, pues los casos de excepción deben estar establecidos en la legislación común ya sustantiva o procesal (sic), sin embargo la ciudadana Juez indica en su sentencia que en su parecer no existe disposición clara que deba aplicar para resolver, a pesar de que advierte el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles en el cual fue basada la acción incidental y que (para ella) se debe entender como un caso de excepción la acción incidental, el cual pretende fincarlo en el derecho sustancial de propiedad. Es desde luego esa conclusión

apartada de la lógica jurídica. Debe revocarse mediante este recurso esa consideración. Es falso que la sentencia definitiva genera un derecho de propiedad y que el incidente planteado es un obstáculo para el actor de no poder continuar la ejecución, al no haber pedido los actos idóneos o continuado su ejecución durante el plazo de (más) de diez años que le otorga el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles. Y eso ya está admitido por la Juez Resolutora. De ahí el agravio que debe estudiarse oficiosamente. No obstante que el artículo 1147 del Código civil no indica que esos casos de excepción serán a criterio del juzgador pues ese no es el espíritu del legislador ni es una laguna de la ley que deba ser suplida por un criterio personalista. Todo criterio jurídico debe ser basado en la ley si no deja de ser criterio que obligue, pues un criterio orientador lo constituye una tesis, siempre que ésta no rebase la ley, pero de modo alguno un criterio basado en una tesis aislada no podría ni obligar ni originar nueva ley en el entendimiento de la Juzgadora: como esa actitud ilegal de decidir no aplicar la ley establecida para el caso que se juzga, porque le parece a su entendimiento que debe optar por no aplicarla y arrogarse facultades de que es al juzgador y no al legislador a quien le ha correspondido establecer los casos de excepción a las reglas de fondo y forma del procedimiento. Los casos de excepción del artículo 1147 se encuentran en los artículos 1148 al 1152 del Código Civil. Y lo que se demandó en la acción incidental son las excepciones u oposición a la ejecución de sentencia ya iniciada que el actor principal abandonó durante más de diez años, sin haber instado el acto adecuado para ejecutar sentencia, además que se ha surtido un obstáculo legal insuperable probado en autos, que impediría ejecutar, el cual fue no estudiado o soslayado: siendo este: la variación de los términos de la sentencia, que no por ello con la acción incidental se pretende destruir la cosa juzgada, como equivocadamente lo sostiene la Juez del conocimiento, sino que esa sentencia ya no puede ejecutarse y debe quedar tal cual está, solo que no es dable continuar su ejecución, porque ha prescrito el derecho del



actor y porque la misma sentencia ya fue variada a petición del actor fuera del plazo de los diez años, siendo esto último el obstáculo legal insuperable para ejecutar sentencia que no se estudió en la resolución incidental. – Lo anterior, son razones suficientes para revocar los actos apelados, que son confusos en su exposición, lo cual pido a esa Sala revisora, que en todo caso debe asumir jurisdicción y dictar debida sentencia fundada y motivada, conforme a las reglas establecidas para el caso que se juzga en su totalidad. – Es una falsedad de la Juzgadora al plantear en la foja 13 de su sentencia incidental que la acción de ejecución de sentencia es imprescriptible porque lo es el derecho de propiedad. Es una desacierto de la A Quo al considerar que necesita una ley o disposición que le faculte para decidir que la ejecución de sentencia imprescriptible porque no la hay, a pesar de que existe el multicitado artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles que ya lo advirtió de la demanda incidental, y por ello invoca la tesis aislada en que funda su sentencia, la cual solicito se tenga por reproducida, a fin de obviar repeticiones inútiles, la cual no es vinculante como aquella que le sugiere la imprescriptibilidad de los actos de ejecución de una sentencia de otorgamiento de contrato en escritura pública, como se advierte de las fojas 14 y 15 de su sentencia respecto al considerando sexto, para concluir calificando de improcedente la demanda incidental propuesta, actuación que se surte en agravio de mis derechos procesales, ya que por principio no podría aplicar una tesis no vinculante y sí en cambio la Juzgadora está obligada a observar las disposiciones vigentes a la fecha en que suceden los hechos materia de la acción incidental. – Es una falsedad también que el demandado incidentista **** * haya expresado verdaderos motivos de disenso respecto a la incidencia, pues solo dijo ser improcedente la demanda propuesta pero no aportó pruebas ni contestó adecuadamente los hechos de la demanda, por lo que es un exceso de la Juzgadora que deben enmendarse, porque el demandado incidentista debió tenersele

por confeso de aquellos hechos contra los que nada adujo en defensa. No es verdad que se opuso a la demanda incidental como se advierte del RESOLUTIVO PRIMERO de la sentencia interlocutoria impugnada, solo presentó su escrito contestando y evadiendo la demanda, aduciendo hechos de la primera instancia. – Es ilegal que se diga en resolutivo PRIMERO que no se acreditó la incidencia, si lo que demuestra la sentencia es que la Juez provoca la improcedencia al resolver y su sentencia es contraria a lo que planteó, a los medios de prueba y optó por no aplicar la disposición idónea de la ley. Es falso que abordó todas las cuestiones planteadas. Es verdad que la Juez observó que el actor abandonó sus derechos procesales durante el plazo der (sic) más de once años, por lo que debe revocarse la sentencia objeto de ésta apelación y dictarse otra resolución conforme a derecho. Y así lo pido.”- - - - -

5.- Estando debidamente integrado el toca relativo, se ordenó turnarlo al Magistrado ponente, para el dictado de la resolución respectiva.- - - - -

C O N S I D E R A N D O

I. Que esta Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla del Tribunal Superior de Justicia del Estado; es competente para conocer y resolver sobre el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 686, del Código de Procedimientos Civiles, 49 y 59, fracción I, del Código de Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas, por impugnarse una resolución de un juzgado de primera instancia ubicado dentro del ámbito territorial en el que ejerce jurisdicción esta sala.- - - - -



II. Con fundamento en el artículo 663 del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Chiapas, el recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior.- - - - -

III.- Expone como agravios ***** *****, que la Juez de instancia estableció equivocadamente de manera restrictiva o limitante, la acción planteada, al decir que demandó la prescripción del plazo para ejecutar la sentencia definitiva y el obstáculo legal insuperable, sin embargo al redactar el considerando VI indica que es improcedente la prescripción en términos del artículo 400 del Código Procesal, al analizar las constancias; pero le agravia el hecho de que la juez decide no aplicar las disposiciones de fondo establecidas para la acción que contempla el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles y plantea oscuramente como si la ejecución aún no se hubiera pedido por el actor, lo cual es una falsedad, la ejecución inicia desde el momento en que se decreta la rebeldía, dijo además que la juez admite a su favor que el actor abandonó el procedimiento durante más de diez años, y que la A quo en su sentencia no está fundada y no es clara. Al respecto se contesta lo siguiente: - - - - -

Los agravios expuestos son infundados en virtud de que el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Chiapas, prevé el plazo de diez años para solicitar la ejecución de una sentencia. Ahora bien, dicho artículo refiere a un plazo de prescripción, mismo que empieza a contar a partir del día en que haya vencido el término judicial para el

cumplimiento voluntario. Sin embargo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que no obstante, el derecho a exigir la ejecución de sentencia en la acción proforma, como es el caso que nos compete, constituye una excepción a la regla general de prescripción contenida en dicho precepto, porque el derecho de reclamar el otorgamiento y firma de escritura es accesorio al derecho principal que es el de propiedad, el cual, a diferencia de otros derechos reales, éste no se pierde por el no uso o por la falta de ejercicio, pues es un derecho potestativo que puede hacerse valer en cualquier momento mientras sea titular del derecho de propiedad. Además, tampoco es dable que opere la prescripción, porque lejos de favorecer la certeza jurídica de los inmuebles provocaría lo contrario, es decir, se prestaría a la indefinición de la situación jurídica de los bienes inmuebles y, por ende, el inconveniente de no ofrecer seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad y los derechos de terceros a conocer de las transacciones que deben ser inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, lo cual tiene como finalidad primordial impedir fraudes en las enajenaciones y gravámenes sobre inmuebles; de ahí que no puede aplicar la prescripción al derecho de exigir la ejecución de una sentencia en acción proforma. En consecuencia de lo anterior; le asiste derecho a la juzgadora para negar la prestación solicitada por el ahora apelante.- - - - -

Apoya a lo anterior la Tesis aislada emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; con número de Registro digital: 2021195; localizable en la Décima Época; cuyo rubro es:- - - - -

***“OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA. EL DERECHO A
EXIGIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA EN ACCIÓN***



PROFORMA ES IMPRESCRIPTIBLE (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). *El artículo 529 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, prevé el plazo de diez años para solicitar la ejecución de una sentencia. Ahora bien, dicho artículo refiere a un plazo de prescripción, mismo que empieza a contar a partir del día en que haya vencido el término judicial para el cumplimiento voluntario. No obstante, el derecho a exigir la ejecución de sentencia en la acción proforma, constituye una excepción a la regla general de prescripción contenida en dicho precepto, porque el derecho de reclamar el otorgamiento y firma de escritura es accesorio al derecho principal que es el de propiedad, el cual, a diferencia de otros derechos reales, éste no se pierde por el no uso o por la falta de ejercicio, pues es un derecho potestativo que puede hacerse valer en cualquier momento mientras sea titular del derecho de propiedad. Además, tampoco es dable que opere la prescripción, porque lejos de favorecer la certeza jurídica de los inmuebles provocaría lo contrario, es decir, se prestaría a la indefinición de la situación jurídica de los bienes inmuebles y, por ende, el inconveniente de no ofrecer seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad y los derechos de terceros a conocer de las transacciones que deben ser inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, lo cual tiene como finalidad primordial impedir fraudes en las enajenaciones y gravámenes sobre inmuebles; de ahí que no puede aplicar la prescripción al derecho de exigir la ejecución de una sentencia en acción proforma, toda vez que se pretende dotar de certeza jurídica al procedimiento de ejecución a fin de brindar seguridad a las partes.”-----*

Asi también, el inconforme dijo que le causa agravio la sentencia apelada pues la juez consideró cuestiones inherentes al derecho de propiedad; ya que la pretensión de la demanda

incidental es para sancionar la contumacia o inactividad o por la no asertividad o por la inexistencia de actos que ya no podrán realizarse porque el acto no los satisfizo durante más de diez años, o haber abandonado esa obligación procesal impuesta en la ley en el citado artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles aplicable en el Estado.- - - - -

Al respecto se le dice al inconforme que son infundados sus argumentos porque si bien el artículo 509 de la Ley Procesal Civil del Estado, estima que la acción para pedir una ejecución de sentencia, transacción o convenio judicial dura diez años contados desde el día en que se venció el término judicial para el cumplimiento voluntario de lo juzgado y sentenciado, cierto es también que la ley suele fijar el término de prescripción de las obligaciones como lo cita de forma correcta el disidente, sin embargo hay excepciones en la regla entratándose de obligaciones que incluso son imprescriptibles, como la que hoy nos compete, que del análisis del presente estudio se precisa que en términos generales las obligaciones se extinguen por el término de diez años, sin que el acreedor exija cumplimiento al deudor, plazo que debe contarse a partir del momento en que la obligación pudo haberse exigido conforme a derecho. Sin embargo el artículo en cita refiere a un plazo de prescripción, mismo que empieza a contar a partir del día en que haya vencido el término judicial para el cumplimiento voluntario. No obstante, el derecho a exigir la ejecución de sentencia en la acción proforma, constituye una excepción a la regla general de prescripción contenida en dicho precepto, porque el derecho de reclamar el otorgamiento y firma de escritura es accesorio al derecho principal que es el de propiedad, el cual, a diferencia de



otros derechos reales, éste no se pierde por el no uso o por la falta de ejercicio, pues es un derecho potestativo que puede hacerse valer en cualquier momento mientras sea titular del derecho de propiedad. De ahí que las inconformidades que expuso el recurrente resulten infundadas.- - - - -

Expresa el inconforme que la demanda incidental no trata solo de la prescripción, sino que también del obstáculo legal insuperable contenido en la sentencia de primera instancia porque así fue observado en ejecución y materializado durante esa etapa por actos efectuados por el actor principal para variar la sentencia que constan en el proceso, lo cual constituye un todo en su derecho a oponerse dadas las circunstancias acaecidas durante la ejecución que inicia propiamente con la declaración de rebeldía.- - - - -

Los referidos motivos de inconformidad de igual manera resultan infundados en virtud de que son apreciaciones subjetivas sin un sustento legal aunado a ello la parte toral del estudio que combatió el disidente ya fue correctamente contestado.- - - - -

De igual Manera aduce el apelante que es improcedente la aplicación del artículo 1147 del Código Civil por parte de la Juez en la sentencia incidental impugnada, por cuanto que esa disposición es parte medular aplicada en la sentencia pero esa hipótesis no contempla que los casos de excepción sean facultad del juzgador crearlos, sino al legislador, y el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles, que la Juez soslaya

observar para resolver, es claro y aplicable a la demanda planteada; pero decide equivocadamente no observarlo para beneficiar a la contraria. Provocando la inequidad procesal.- - - -

No le asiste razón al recurrente porque los artículos que citó la juez resolutora son correctos y si los analizó, pero no soslayó que existe un sustento legal emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el cual sustenta el estudio realizado por la juez primigenia. Por lo tanto lo expuesto de igual forma es infundado.- - - - -

Con relación a sus argumentos de agravios que refieren que la sentencia no fue clara y fue necesario aclarar fuera del plazo de los diez años. Por lo que resulta claro que se ha violado, en su agravio al sentenciar, por no atender lo dispuesto en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles.- - - - -

De ninguna manera le asiste razón al apelante, porque la sentencia recurrida fue clara precisa y congruente, clara porque en todo momento la jueza expresó los motivos por los cuales estimó negar la acción incidental ejercida; precisa y congruente porque el estudio trato del análisis de las prestaciones reclamadas y se le dijo las razones por las que la acción ejercida es improcedente. De ahí lo infundado de los agravios expuestos. - - - - -

Tocante a que aduce el apelante que se violaron las reglas del procedimiento establecidas por el artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el estado, se contesta lo siguiente:- - - - -



No tiene razón porque no existe dentro del proceso ninguna regla que se haya violado. Son apreciaciones totalmente subjetivas por parte del apelante. Reiterándose lo infundado del agravio.- - - - -

Por lo expuesto y fundado; esta Sala,- - - - -

R E S U E L V E

PRIMERO.- Se **CONFIRMA** la sentencia interlocutoria de **2 dos de abril de 2024 dos mil veinticuatro**, pronunciada por la Juez Primero del Ramo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de TUXTLA, con residencia en aquella ciudad; en los autos del expediente número **40/2012**, relativo al **INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE EJECUCION DE SENTENCIA**, promovido por ***** *****, en contra de *****, deducido del **JUICIO ORDINARIO CIVIL DE OTORGAMIENTO DE ESCRITURA**, promovido por *****, en contra de *****.- - - - -

SEGUNDO.- Remítase testimonios de la presente resolución al juzgado de origen, para su conocimiento y efectos legales procedentes; oportunamente archívese el toca como asunto concluido. **Notifíquese y Cúmplase.- - - - -**

Así lo resolvieron los Ciudadanos Magistrados que integran la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Licenciados GUILLERMO HORACIO ESPONDA ORANTES,

MARIA ITZEL BALLINAS BARBOSA, y CLAUDIA LUCIA DOMINGUEZ ACUÑA, siendo presidenta la tercera de las nombradas y ponente el primero de los citados; y firman por ante la licenciada CLAUDIA VIDAL HERNANDEZ, Secretaria General de Acuerdos de ésta Sala, que da fe.- - - - -

MAGISTRADA PRESIDENTA

LIC. CLAUDIA LUCIA DOMINGUEZ ACUÑA.

MAGISTRADA PONENCIA “A”

MAGISTRADO PONENCIA “B”

LIC. MARIA ITZEL BALLINAS BARBOSA. LIC. GUILLERMO HORACIO ESPONDA ORANTES.

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS:

LIC. CLAUDIA VIDAL HERNANDEZ

GHEO/JCLH//jamm.

ELIMINADO: 17 elementos. FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 6, apartado A, fracción II y 16 párrafo segundo de la constitución política de los Estado Unidos Mexicanos; 3 de la Constitución Política del estado libre y Soberano de Chiapas; 100, 106 fracción III, 107 y 116 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6 de la ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 134, 139, y 140 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas; 4 fracción II, 12 y 13 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas; Séptimo fracción III y Trigésimo Octavo fracciones I y II de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. MOTIVO: se trata de información confidencial concerniente a datos personales identificativos.